**AMPARO EN REVISIÓN 350/2022
QUEJOSA Y RECURRENTE:**

**AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE:
CÁMARA DE SENADORES**

Vo. Bo.
Ministra

PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

**SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y
JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**

Hechos relevantes y/o contexto

Una persona jurídica constituida en México se dedica a la producción, comercialización y edición de materiales audiovisuales.

El primero de junio de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bibliotecas, cuyos objetivos esenciales, consisten en establecer las base de coordinación de los gobiernos de todos los niveles en materia de bibliotecas públicas, definir las políticas de su establecimiento, sostenimiento y organización, definir las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, proponer las directrices para la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas, fomentar la formación de bibliotecas por parte de los sectores social y privado, fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental y regular los términos del depósito legal.

En contra de esa Ley General, la persona jurídica promovió una demanda de amparo en la que controversió que la Ley General de Bibliotecas es inconstitucional porque:

- La decisión sobre la puesta a disposición, consulta, difusión pública de obras y fonogramas, así como el derecho de reproducción en su modalidad de copiado corresponde a los autores, productores y editores, y no a las bibliotecas que desbordan el depósito legal al operar como distribuidoras.
- La Ley General de Bibliotecas afecta de manera desproporcionada los derechos de explotación de las obras pues rebasa los fines del depósito legal que originariamente corresponde al Instituto Nacional del Derecho de Autor (INDAUTOR) o a la Cineteca Nacional. La ley reclamada permite la difusión indiscriminada de contenidos incluso antes de su estreno o difusión por parte de le persona titular de los derechos de autor. Las bibliotecas depositarias no deben ser puntos de consulta pública de obras sin la previa autorización respectiva.

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

- La Ley General de Bibliotecas causa inseguridad jurídica al permitir que las bibliotecas decidan los supuestos de acceso público a las obras conforme a sus políticas de almacenamiento y consulta pública sin un campo preciso de aplicación. Distorsiona la explotación normal de la obra al menoscabar el mercado
- Se afectan los derechos de autor al preverse el depósito de obras inéditas antes de su publicación, además de trastocar el derecho a la privacidad de esas obras.
- La falta de adopción de medidas tecnológicas para impedir la divulgación de obras digitales afecta los derechos de los autores pues permite una consulta pública e irrestricta, incluso para su reproducción.
- El artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas es inconstitucional al prever una multa fija y por tanto excesiva en caso de incumplimiento de entrega de los ejemplares relativos al depósito legal que prevé el artículo 37 de la misma ley.

Una vez agotado el procedimiento, el juzgado de distrito dictó la sentencia mediante la que determinó:

- **El sobreseimiento por la norma que prevé la multa.**
- **Negó el amparo por los artículos que forman el sistema normativo del depósito legal.**
- **Concedió el amparo por los artículos que prevén la temporalidad para la entrega de las obras, al establecer que deben entregarse hasta que la persona titular de los derechos decida su distribución.**

Esa persona jurídica interpuso un recurso de revisión en el que, controvirtió el sobreseimiento y las razones por las que el juzgado negó el amparo.

El correspondiente **tribunal colegiado confirmó el sobreseimiento por la norma que prevé la multa** y declaró carecer de competencia para resolver el aspecto de constitucionalidad y por ende remitió el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Problema jurídico

Determinar si la **Ley General de Bibliotecas** es constitucional a partir de la alegada afectación a los derechos de comunicación pública y reproducción de las obras.

Decisión judicial

La Ley General de Bibliotecas es constitucional.

Para arribar a esa conclusión se desarrollan los apartados siguientes:

- A.** Determinar si el sistema normativo reclamado de la Ley General de Bibliotecas respeta la protección de los derechos morales y patrimoniales de las personas autoras que emanan del artículo 28,

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

décimo párrafo, de la Constitución Política del país, a partir de la alegada violación a los derechos de comunicación pública y reproducción de las obras

- B.** Establecer si la interpretación conforme de las normas reclamadas conduce a otorgar o negar el amparo

Mediante los apartados anunciados se establece la constitucionalidad de la Ley General de Bibliotecas a partir de su interpretación conforme en el sentido de que debe entenderse que las obras encuentran protección en la Ley Federal del Derecho de Autor y que el artículo 39, al imponer la obligación de entregar las obras editadas o producidas una vez que se hayan divulgado o publicado para cualquiera de sus finalidades, no vulnera los derechos de los autores en sus vertientes patrimonial o moral, en tanto la temporalidad para efectuar la entrega de los materiales correspondientes deberá computarse a partir de que sean distribuidos, con la excepción ya señalada respecto de las publicaciones periódicas.

Asimismo, se repara oficiosamente la incongruencia de la sentencia revisada, consistente en que, a pesar de considerar constitucional el plazo para la entrega de las obras inéditas a partir de la interpretación conforme relativa a que el plazo comienza a partir de que la persona titular de los derechos decide distribuir su obra, el juez otorgó el amparo.

ÍNDICE TEMÁTICO

	Apartado	Criterio y decisión	Págs.
I	COMPETENCIA	La Primera Sala es competente para conocer del presente asunto porque se trata del reclamo de la Ley General de Bibliotecas, es materia administrativa y ambas salas son competentes para conocer de ese tipo de asuntos.	9-10
II	OPORTUNIDAD	Es un presupuesto examinado por el tribunal colegiado que no amerita mayor pronunciamiento.	10
III	LEGITIMACIÓN	Es un presupuesto examinado por el tribunal colegiado que no amerita mayor pronunciamiento.	10
IV	PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN	Los recursos de revisión son procedentes en virtud de que se interpusieron en contra de una sentencia dictada por un juez de distrito. <u>Sin embargo, el tribunal colegiado declaró infundado el recurso de la Cámara de Senadores, por lo que su</u>	10

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

		<u>situación jurídica no forma parte de los resolutivos de esta sentencia.</u>	
V	CAUSAS DE IMPROCEDENCIA	<p>No se advierten causas de improcedencia distintas a las examinadas en la instancia previa.</p> <p>Se precisa que no es obstáculo un argumento genérico de la Cámara de Senadores.</p>	11-12
VI	ESTUDIO DE FONDO	<p><u>Problemas jurídicos a resolver:</u></p> <p>A. Determinar si el sistema normativo reclamado de la Ley General de Bibliotecas respeta la protección de los derechos morales y patrimoniales de las personas autoras que emanan del artículo 28, décimo párrafo, de la Constitución Política del país, a partir de la alegada violación a los derechos de comunicación pública y reproducción de las obras</p> <p>B. Establecer si la interpretación conforme de las normas reclamadas conduce a otorgar o negar el amparo</p> <p>Para resolver cada problema jurídico se recurre a establecer: (i) El planteamiento de la parte quejosa, (ii) El parámetro de regularidad aplicable y (iii) El análisis del caso concreto.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Reparación oficiosa de la incongruencia de la sentencia revisad 	<p>13-43</p> <p>43-50</p> <p>51-52</p>
VII	DECISIÓN	<p>Primero. En la materia de la revisión, se revoca la sentencia recurrida.</p> <p>Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege en contra de los artículos 1 fracción VI, 6, 34, 37, 38, 39 y 40 fracción III, de la Ley General de Bibliotecas.</p>	53

**AMPARO EN REVISIÓN: 350/2022
QUEJOSA Y RECURRENTE:**

**AUTORIDAD RESPONSABLE RECURRENTE:
CÁMARA DE SENADORES**

Vo. Bo.
Ministra

PONENTE: MINISTRA ANA MARGARITA RÍOS FARJAT

**SECRETARIOS: JUAN JAIME GONZÁLEZ VARAS Y
JAVIER ALEXANDRO GONZÁLEZ RODRÍGUEZ**

Ciudad de México. Acuerdo de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación correspondiente al ***** de ***** de dos mil veintitrés, emite la siguiente:

SENTENCIA

Mediante la cual se resuelve el amparo en revisión 350/2022 interpuesto por ***** en contra de la sentencia dictada el veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno por el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México en el juicio de amparo indirecto *****.

Los problemas jurídicos por resolver por esta Primera Sala consisten en determinar si es constitucional el sistema normativo del depósito legal establecido en la **Ley General de Bibliotecas** a partir de la alegada afectación a los derechos de comunicación pública y reproducción de las obras.

ANTECEDENTES Y TRÁMITE

1. **Hechos.** De las constancias que obran en el expediente se desprenden los siguientes antecedentes.
2. La persona jurídica denominada ***** (en adelante *****) es una empresa que se dedica a la producción, comercialización y edición de materiales audiovisuales.
3. El primero de junio de dos mil veintiuno, se publicó en el Diario Oficial de la Federación la Ley General de Bibliotecas, cuyos objetivos esenciales, consisten en establecer las base de coordinación de los gobiernos de todos los niveles en materia de bibliotecas públicas, definir las políticas de su establecimiento, sostenimiento y organización, definir las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas, proponer las directrices para la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas, fomentar la formación de bibliotecas por parte de los sectores social y privado, fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental y regular los términos del depósito legal¹.

¹ **Artículo 1.** La presente Ley es de observancia general en toda la República, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

- I. Establecer las bases de coordinación de los gobiernos Federal, de las entidades federativas, los municipios y alcaldías de la Ciudad de México en materia de bibliotecas públicas;
- II. Definir las políticas de establecimiento, sostenimiento y organización de las bibliotecas públicas;
- III. Definir las normas básicas de funcionamiento de la Red Nacional de Bibliotecas Públicas;
- IV. Proponer las directrices para la integración del Sistema Nacional de Bibliotecas;
- V. Fomentar la formación de bibliotecas por parte de los sectores social y privado;
- VI. Fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo, y
- VII. Regular los términos del Depósito Legal.

4. **Demanda de amparo.** El ocho de julio de dos mil veintiuno, ***** promovió un juicio de amparo indirecto², en el que reclamó manera destacada los artículos 1 fracción VI, 6, 34, 37, 38, 39, 40 fracción III, y 43 de la Ley General de Bibliotecas que establecen diversas obligaciones a quienes editan y producen obras, orientadas a integrar el depósito legal del servicio público bibliotecario. El texto de las **normas reclamadas** es el siguiente:

Artículo 1. La presente Ley es de observancia general en toda la República, sus disposiciones son de orden público e interés social y tiene por objeto:

[...]

VI. Fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo, y

[...]

Artículo 6. Los usuarios de las bibliotecas públicas harán uso de los servicios bibliotecarios sin más límite que los establecidos por las disposiciones reglamentarias sobre consulta de acervos y visita pública. Los responsables de las bibliotecas públicas en ningún caso podrán condicionar el acceso a dichos servicios, con independencia del uso que cada usuario haga de la información a la que tenga acceso.

Para fines estadísticos o de reconocimiento al trabajo de la institución a cargo del acervo, los responsables de las bibliotecas públicas podrán solicitar a la persona usuaria información sobre las fuentes de consulta, el tema de su investigación y si tiene planeado hacerla pública.

² En la demanda señaló como autoridades responsables a las Cámaras de Diputados y Senadores del Congreso de la Unión, al Presidente de la República y la Secretaría de Gobernación. De tales autoridades les reclamó en el ámbito de sus respectivas competencias la aprobación, expedición y publicación de la Ley General de Bibliotecas.

Artículo 34. Las obras a que se refiere el artículo anterior podrán ser, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- I. Libros, publicaciones periódicas, catálogos, folletos y pliegos;
- II. Publicaciones periódicas como periódicos, diarios, anuarios, revistas y memorias;
- III. Material cartográfico como mapas y planos, cartas de navegación, aeronáuticas o celestes;
- IV. Partituras;
- V. Fonogramas, discos y cintas;
- VI. Obras audiovisuales, micropelículas, diapositivas y fotografías;
- VII. Material gráfico, carteles y diagramas, y
- VIII. Cualquier otra que se considere relevante para documentar la memoria del conocimiento en el territorio nacional.

Artículo 37. Todos los editores y productores de los materiales mencionados en los artículos 33 y 34 de esta Ley, deberán entregar ejemplares de todas sus ediciones y producciones, de acuerdo con lo siguiente:

- I. Dos ejemplares a la Biblioteca de México;
- II. Dos ejemplares a la Biblioteca del Congreso de la Unión, y
- III. Dos ejemplares a la Biblioteca Nacional de México.

En el caso de las obras publicadas en formatos electrónico, analógico o digital, se entregará un solo ejemplar por institución con los materiales complementarios que permitan su consulta y preservación.

Artículo 38. Cada uno de los repositorios del Depósito Legal, establecerá sus políticas de almacenamiento, custodia, conservación y consulta pública, con base en las disposiciones aplicables.

Artículo 39. Los materiales a que se refiere el artículo 37, se entregarán dentro de los sesenta días naturales siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas, tan pronto sean puestas en circulación.

Artículo 40. Las instituciones receptoras del Depósito Legal deberán:

[...]

III. Establecer las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales recibidos, la prestación de los servicios bibliotecarios y, en su caso, de consulta pública;

[...]

Artículo 43. Los editores y productores del país que no cumplan con la obligación consignada en el artículo 39 de esta Ley, se harán acreedores a una multa equivalente a cincuenta veces el precio de venta al público de los materiales no entregados. La aplicación de la sanción no excusa al infractor de cumplir con la entrega de los materiales.

5. Conceptos de violación. En la demanda de amparo, la empresa editora hizo valer que es constitucional el sistema normativo del depósito legal establecido en la Ley General de Bibliotecas. En los conceptos de violación, planteó esencialmente lo siguiente:

- La Ley General de Bibliotecas viola los **derechos de propiedad intelectual reconocidos en el artículo 28 de la Constitución Política del país** porque la **decisión sobre la puesta a disposición, consulta, difusión pública de obras y fonogramas, así como el derecho de reproducción en su modalidad de copiado corresponde a los autores, productores y editores, y no a las bibliotecas que desbordan el depósito legal al operar como distribuidoras.**
- En el proceso legislativo se previó **sujetar la consulta de las obras a la Ley Federal del Derecho de Autor**, pero esa cuestión no trascendió al producto legislativo que es la Ley General de Bibliotecas, que **omite los controles previstos en esa ley federal y cuerpos normativos afines.**
- La Ley General de Bibliotecas **afecta de manera desproporcionada los derechos de explotación** de las obras pues **rebasa los fines del depósito legal** que originariamente corresponde al Instituto Nacional del

Derecho de Autor (INDAUTOR) o a la Cineteca Nacional. La ley reclamada **permite la difusión indiscriminada de contenidos incluso antes de su estreno o difusión** por parte de la persona titular de los derechos de autor. **Las bibliotecas depositarias no deben ser puntos de consulta pública de obras sin la previa autorización respectiva.**

- La Ley General de Bibliotecas causa **inseguridad jurídica al permitir que las bibliotecas decidan los supuestos de acceso público a las obras** conforme a sus políticas de almacenamiento y consulta pública sin un campo preciso de aplicación. Distorsiona la explotación normal de la obra al **menoscabar el mercado.**
- Se afectan los derechos de autor al **preverse el depósito de obras inéditas** antes de su publicación, además de **trastocar el derecho a la privacidad de esas obras.**
- La **falta de adopción de medidas tecnológicas para impedir la divulgación** de obras digitales afecta los derechos de los autores pues **permite una consulta pública e irrestricta, incluso para su reproducción.**
- El artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas es inconstitucional al prever una **multa fija y por tanto excesiva** en caso de incumplimiento de entrega de los ejemplares relativos al depósito legal que prevé el artículo 37 de la misma ley.

6. **Trámite y resolución del juicio de amparo**³. En el auto inicial, el juzgado admitió la demanda de amparo y requirió a las autoridades señaladas como responsables que rindieran su informe justificado.

7. **Sentencia en el juicio de amparo indirecto.** El veintisiete de diciembre de dos mil veintiuno, el juzgado dictó la sentencia en la que, ante la falta de impugnación por vicios propios **sobreseyó**

³ El conocimiento del juicio de amparo indirecto correspondió al Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa de la Ciudad de México que en el acuerdo inicial del catorce de julio de dos mil veintiuno lo radicó con el número de expediente 865/2021.

respecto de la publicación de la Ley General de Bibliotecas, asimismo, respecto del artículo 43 que prevé la imposición de la multa, por considerar que esa porción normativa es heteroaplicativa y la empresa editorial no acreditó su interés jurídico ante su aplicación. En otro aspecto, **negó el amparo** respecto del sistema normativo del depósito legal que permite la difusión de los materiales entregados. Finalmente **otorgó el amparo** respecto de las normas contenidas en los artículos 6 y 39 que permiten la difusión de obras inéditas, para el efecto de que el depósito se realice hasta que la obra sea divulgada o distribuida por el titular de los derechos de autor, o bien su entrega, las autoridades correspondientes prevean las medidas para evitar su consulta pública.

8. **Recurso de revisión de la Cámara de Senadores.** En el escrito de agravios tal autoridad responsable controvertió que no debió concederse el amparo respecto del artículo 39 de la Ley General de Bibliotecas, sino sobreseerse porque es una norma heteroaplicativa al regular aspectos del depósito legal y ********* no demostró su aplicación o afectación a su esfera jurídica.
9. **Recurso de revisión de la empresa quejosa.** La empresa ********* interpuso un recurso de revisión en el que controvertió que la sentencia recurrida se estructuró a partir del análisis del derecho a la distribución, cuando lo efectivamente controvertido fueron los derechos de comunicación pública y reproducción. Que el juez debió aplicar la regla de los tres pasos y aplicó incorrectamente el examen de proporcionalidad. Que ante la interpretación conforme del sistema normativo del depósito legal debió otorgarse el amparo y no negarse. En los agravios esgrimió lo siguiente:

- **Primer agravio.** La sentencia examinó la Ley General de Bibliotecas a partir de la afectación al derecho de distribución

cuando lo efectivamente planteado fue la transgresión a los derechos de comunicación pública y reproducción, aspectos que vulnera la norma reclamada.

- **Segundo agravio.** El juez debió aplicar la regla de los tres pasos que es un parámetro especializado para establecer si las normas con incidencia en los derechos de autor las respetan. La ley reclamada no supera ese parámetro porque elimina el derecho de los autores para decidir si autoriza la consulta pública de sus obras a través de medios digitales.
- **Tercer agravio.** El juez aplicó incorrectamente el examen de proporcionalidad porque partió del análisis del derecho a la distribución cuando lo efectivamente planteado fue la transgresión a los derechos de comunicación pública y reproducción, aspectos que vulnera la norma reclamada que no supera la grada de necesidad porque existen medidas menos lesivas para la preservación cultural sin necesidad de su consulta pública indiscriminada pues afecta la normal explotación de las obras.
- **Cuarto agravio.** Ante la interpretación conforme realizada por el juez de los artículos 34, 37, 38 y 40 que integran el sistema normativo del depósito legal, debió otorgar el amparo porque el juzgador emitió una regla interpretativa aplicable al quejoso de manera favorable.

10. Determinación del tribunal colegiado de circuito⁴. El tribunal colegiado de circuito confirmó la sentencia recurrida para mantener el **sobreseimiento** en torno a la publicación de la Ley General de Bibliotecas. Asimismo, confirmó el **sobreseimiento** por el artículo 43 de la Ley General de Bibliotecas que prevé la multa como sanción. En otro aspecto, por carecer de competencia originaria para resolver el resto de los artículos reclamados, ordenó remitir el asunto a esta Suprema Corte de Justicia de la Nación.

⁴ El conocimiento del recurso de revisión le correspondió al Decimonoveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito bajo el número de amparo en revisión 42/2022, y seguido el procedimiento lo resolvió en la sesión correspondiente al veintitrés de junio de dos mil veintidós.

- 11. Trámite ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación.** Por acuerdo del Ministro Presidente de este alto tribunal del ocho de julio de dos mil veintidós, se tuvo por recibido el recurso y se ordenó su registro con el número de expediente 350/2022; asimismo, se asumió la competencia originaria para conocer del asunto, se admitió a trámite el recurso y ordenó su envío a la Primera Sala y su turno a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.
- 12. Avocamiento.** En acuerdo del treinta y uno de agosto de dos mil veintidós, la Presidenta de esta Primera Sala se avocó al conocimiento del presente asunto y se ordenó el envío de los autos a la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat.

I. COMPETENCIA

- 13.** Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación es competente para conocer del presente amparo en revisión en términos de lo dispuesto en los artículos 107, fracción VIII, inciso a), de la Constitución Política del país; 83 de la Ley de Amparo; 21, fracción III de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con los puntos Segundo, fracción III, inciso A), Tercero, Quinto y Sexto del Acuerdo General 1/2023, emitido por el Pleno de este alto tribunal⁵. Lo anterior, sin que resulte necesaria la intervención del Tribunal Pleno.
- 14.** Cabe señalar que aun cuando el presente amparo en revisión no corresponde a las materias de las que en forma ordinaria conoce

⁵ Acuerdo general número 1/2023, de veintiséis de enero de dos mil veintitrés, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los tribunales colegiados de circuito.

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

esta Primera Sala en términos de lo dispuesto en el referido acuerdo y en el artículo 37 del Reglamento Interior de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es obstáculo para que resulte competente para conocer del asunto, pues el primer párrafo del artículo 86 del reglamento citado dispone que al igual que los amparos en revisión, los amparos directos en revisión de la competencia originaria del Pleno, que sean en materia administrativa, se turnarán a los Ministros y Ministras de ambas Salas, de manera que si el recurso que se examina es de materia administrativa, se turnó a una Ministra adscrita a esta Primera Sala y no existe solicitud de diverso Ministro o Ministra para que lo resuelva el Pleno, entonces, en términos de lo dispuesto en el punto Tercero del referido Acuerdo Plenario 1/2023, esta Sala debe avocarse a su conocimiento y resolución.

II. OPORTUNIDAD

15. Es inconducente mayor pronunciamiento en torno a la oportunidad de la interposición del recurso de revisión, en virtud de que el tribunal colegiado del conocimiento resolvió esa cuestión.

III. LEGITIMACIÓN

16. En cuanto a la legitimación de quienes interpusieron los recursos revisión, el órgano jurisdiccional del conocimiento concluyó que fue por parte legitimada.

IV. PROCEDENCIA DE LOS RECURSOS DE REVISIÓN

17. Los recursos de revisión son procedentes en virtud de que se interpusieron en contra de una sentencia dictada por un juez de distrito en un juicio de amparo en el que se controvertió la

constitucionalidad de la Ley General de Bibliotecas. Por ende, se surten los extremos del punto tercero, en relación con el Segundo, fracción III, inciso A), del Acuerdo General Plenario 1/2023.

18. Sin embargo, respecto del recurso de revisión interpuesto por la Cámara de Senadores, el tribunal colegiado de circuito lo declaró infundado, por lo que ese recurso no se reexaminará en esta instancia. Por ende, su situación jurídica no formará parte de los resolutivos de esta sentencia.

V. CAUSAS DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO

19. La Cámara de Senadores, en su informe justificado, hizo valer a manera de causa de improcedencia que la culminación del proceso legislativo no afecta a la empresa editorial. De manera puntual la cámara referida señaló lo siguiente:

“[...] la sola discusión, votación y aprobación de la normatividad de mérito, no causa afectación alguna en los intereses jurídicos de la parte quejosa, puesto que la culminación del proceso legislativo que se llevó a cabo en este cuerpo colegiado no deriva necesariamente en un perjuicio a la esfera jurídica del amparista [...]”.

20. Sin embargo, resulta inconducente la devolución del asunto al tribunal colegiado para el estudio específico de lo hecho valer por la Cámara de Senadores a manera de causa de improcedencia, toda vez que a nada llevaría y sólo retrasaría la resolución del caso, máxime que resulta evidente que: (a) no es viable desvincular el estudio de la disposición impugnada del que concierne a su acto de aplicación; y (b) el perjuicio que genere o no la expedición de las normas impugnadas, correspondería al estudio de fondo del asunto.

21. Una vez aclarado lo anterior, no se advierte una causa de improcedencia distinta a las examinadas en la instancia previa, ni aprecia un matiz distinto o por motivo diverso, por lo que corresponde emprender el estudio de fondo del asunto

VI. ESTUDIO DE FONDO

22. El problema jurídico a resolver por esta Primera Sala consiste en determinar si la Ley General de Bibliotecas, es constitucional a partir de la alegada afectación a los derechos de comunicación pública y reproducción de las obras. Asimismo, establecer si la interpretación conforme de las normas reclamadas conduce a otorgar o negar el amparo.
23. En ese sentido, para resolver cada problema jurídico se recurre a establecer: **(i)** El planteamiento de la parte quejosa, **(ii)** El parámetro de regularidad aplicable y **(iii)** El análisis del caso concreto. Por tanto, la estructura del asunto es la siguiente:

Problemas jurídicos a resolver:

A. Determinar si el sistema normativo reclamado de la Ley General de Bibliotecas respeta la protección de los derechos morales y patrimoniales de las personas autoras que emanan del artículo 28, décimo párrafo, de la Constitución Política del país, a partir de la alegada violación a los derechos de comunicación pública y reproducción de las obras

B. Establecer si la interpretación conforme de las normas reclamadas conduce a otorgar o negar el amparo

VI. Problema jurídico A. Determinar si el sistema normativo reclamado de la Ley General de Bibliotecas respeta la protección de los derechos morales y patrimoniales de las personas autoras que emanan del artículo 28, décimo párrafo,

de la Constitución Política del país, a partir de la alegada violación a los derechos de comunicación pública y reproducción de las obras

24. La Ley General de Bibliotecas es constitucional pues la entrega de ejemplares literarios como depósito legal, respeta los derechos de comunicación pública y reproducción de las obras.
25. Para sostener la conclusión anticipada corresponde desarrollar en este apartado los aspectos siguientes: **(i) Planteamiento de la parte quejosa, (ii) Parámetro de regularidad y (iii) Análisis del caso concreto.**

(i) Planteamiento de la parte quejosa

26. En el primer agravio ***** argumenta que el juez examinó la Ley General de Bibliotecas a partir de la afectación al derecho de distribución cuando lo efectivamente planteado fue la transgresión a los derechos de comunicación pública y reproducción, aspectos que vulnera la norma reclamada.
27. En el segundo agravio, ***** alega que el juez debió aplicar la regla de los tres pasos que es un parámetro especializado para establecer si las normas con incidencia en los derechos de autor las respetan. La ley reclamada no supera ese parámetro porque elimina el derecho de los autores para decidir si autoriza la consulta pública de sus obras a través de medios digitales.
28. En el tercer agravio ***** arguye que el juez aplicó incorrectamente el examen de proporcionalidad porque partió del análisis del derecho a la distribución cuando lo efectivamente planteado fue la transgresión a los derechos de comunicación pública y reproducción, aspectos que vulnera la norma reclamada

que no supera la grada de necesidad porque existen medidas menos lesivas para la preservación cultural sin necesidad de su consulta pública indiscriminada pues afecta la normal explotación de las obras.

(ii) Parámetro de regularidad

29. Una vez establecido el planteamiento de *********, lo que corresponde es plasmar el parámetro de regularidad al que debe someterse el escrutinio del depósito legal previsto en la Ley General de Bibliotecas.
30. Como primera cuestión debe esclarecerse que si bien esta Primera Sala, al resolver el amparo en revisión 256/2016 recurrió a la aplicación de la regla de las tres etapas prevista en el Convenio de Berna⁶, y que lo consideró como un parámetro especializado, previsto en varios tratados de los que el Estado mexicano es parte, que permite definir si la medida establecida en la norma combatida es acorde con la Constitución Política del país y con los tratados internacionales. Lo cierto es que esa decisión no tiene por alcance obligar a su aplicación que en todos los casos en que se examinen vinculadas con derechos de autor.
31. Al respecto de la elección de los métodos interpretativos, esta Primera Sala, al resolver el amparo directo en revisión 1886/2003⁷,

⁶ El amparo en revisión 256/2016 lo resolvió esta Primera Sala en la sesión correspondiente al siete de septiembre de dos mil dieciséis por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, quien se reservó el derecho de formular voto concurrente, Jorge Mario Pardo Rebolledo y la Ministra Norma Lucía Piña Hernández (ponente). En contra del emitido por el Ministro presidente en funciones José Ramón Cossío Díaz. Ausente el Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena.

⁷ El amparo directo en revisión 1886/2003 lo resolvió esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión correspondiente al treinta y uno de marzo de dos mil cuatro por unanimidad de cuatro votos de los Ministros José de Jesús Gudiño Pelayo, Juan N. Silva Meza, José Ramón Cossío Díaz y Ministra presidenta

determinó que los juzgadores no se encuentran obligados a aplicar un método de interpretación jurídico específico, por lo que válidamente pueden utilizar el que conforme a su criterio sea el más adecuado para resolver el caso en concreto. De ese asunto derivó la tesis de rubro: “INTERPRETACIÓN DE LA LEY. SI SU TEXTO ES OSCURO O INCOMPLETO Y NO BASTA EL EXAMEN GRAMATICAL, EL JUZGADOR PODRÁ UTILIZAR EL MÉTODO QUE CONFORME A SU CRITERIO SEA EL MÁS ADECUADO PARA RESOLVER EL CASO CONCRETO”⁸.

32. También al resolver diversos asuntos como el amparo en revisión 1034/2019 y amparo directo en revisión 1161/2021⁹, esta Primera

Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente). Ausente el Ministro Humberto Román Palacios.

En tal asunto se controvertió que en la sentencia recurrida se omitió desentrañar y explicar el contenido del artículo 20, apartado A, fracción X, de la Constitución Política del país; al respecto, esta Primera Sala realizó la interpretación de ese precepto y determinó que su contenido no causa confusión u oscuridad.

⁸ La tesis 1a. LXXII/2004 derivada del amparo en revisión 1886/2003 se encuentra publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, novena época, tomo XIX, junio de 2004, página 234, registro digital 181320.

⁹ El amparo en revisión 1034/2019 lo resolvió esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión correspondiente al quince julio de dos mil veinte por unanimidad de cinco votos de las Ministras Norma Lucía Piña Hernández, quien está con el sentido, pero en contra de algunas consideraciones y con consideraciones adicionales, Ana Margarita Ríos Farjat (ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y el Presidente Juan Luis González Alcántara Carrancá, estos tres últimos Ministros, se reservaron el derecho a formular voto concurrente.

En tal asunto, si bien la materia a dilucidar se centró en la constitucionalidad del artículo 270 del Código Nacional de Procedimientos Penales, también se estableció que los jueces no están obligados a verificar la violación a un derecho humano a la luz de un método en particular, ni siquiera porque así se lo hubieran propuesto en la demanda o en el recurso.

El amparo directo en revisión 1161/2021 lo resolvió esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión correspondiente al primero de septiembre de dos mil veintiuno por unanimidad de cinco votos de la Ministra Norma Lucía Piña Hernández, de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá (ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y de la Ministra Presidenta Ana Margarita Ríos Farjat.

En tal asunto, si bien su materia se centró en dilucidar la procedencia del asunto, también se estableció que los operadores jurídicos, en el caso, no estaban obligados a utilizar un determinado test de ponderación, pues basta con que su determinación estuviera formal y materialmente fundada y motivada, para que pudiera ser considerada como correcta.

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

Sala señaló concordar con la Segunda Sala en torno a que para verificar si algún derecho humano reconocido por la Constitución Política del país o por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte se ha transgredido, el juzgador puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que lo ayuden a constatar si existe o no la violación alegada. La persona juzgadora está facultada para decidir cuál es, en su opinión, el método más adecuado para resolver el asunto sometido a su conocimiento.

33. Entre los métodos más comunes para solucionar esas problemáticas se encuentra el test de proporcionalidad que, junto con la interpretación conforme, el escrutinio judicial y otros métodos interpretativos, como la regla de los tres pasos, constituyen herramientas igualmente útiles para dirimir la violación a derechos, sin embargo, lo cierto es que esta Suprema Corte puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas para constatar si existe o no la violación alegada
34. Ahora bien, con el fin de establecer la importancia de la figura del depósito legal, esta Primera Sala considera necesario desarrollar el parámetro de regularidad del derecho a la cultura y al patrimonio cultural.
35. En principio, es importante hacer referencia a lo que se entiende por cultura. La Real Academia Española define a la cultura como *el conjunto de conocimientos que permite a alguien desarrollar su juicio crítico y el conjunto de modos de vida y costumbres, conocimientos y grado de desarrollo artístico, científico, industrial en una época.*

36. Por su parte, en la Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales se definió a la cultura como el conjunto de los rasgos distintivos, espirituales y materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social. Por ende, se precisó que la cultura engloba las artes y las letras, los modos de vida, los derechos fundamentales del ser humano, los sistemas de valores, las tradiciones y las creencias¹⁰.
37. En ese sentido la cultura da al ser humano la capacidad de reflexionar sobre sí mismo, pues por medio de esta, se discernen los valores. A través de la cultura, el ser humano se expresa, toma conciencia de sí mismo, se cuestiona y crea obras que lo trascienden¹¹.
38. Al respecto, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), en la **Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural**¹², señaló que la cultura es el conjunto de rasgos distintivos espirituales, materiales, intelectuales y afectivos que caracterizan a una sociedad o un grupo social y que abarcan las artes, las letras, los estilos de vida, las maneras de vivir juntos, los sistemas de valores, tradiciones y creencias. De esta manera, **la cultura constituye un patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras**¹³.

¹⁰ Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, *Declaración de México sobre las Políticas Culturales*, 26 de julio a 6 de agosto de 1982.

La Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales (MONDIACULT) fue convocada por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO). Se celebró en la Ciudad de México con la participación de 126 países de los 158 que en ese momento formaban parte de UNESCO. El resultado de MONDIACULT fue la adopción de la Declaración de México sobre las Políticas Culturales.

¹¹ *Ídem*.

¹² UNESCO, *Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural*, Resolución aprobada el dos de noviembre de dos mil uno, en la 31ª Conferencia General.

¹³ **Artículo 1 La diversidad cultural, patrimonio común de la humanidad**

39. Finalmente, la Declaración de Friburgo¹⁴ define a la cultura como el conjunto de los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, las instituciones y los modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo¹⁵.
40. Ahora bien, el derecho a la cultura ha sido consagrado en la Declaración Universal de Derechos Humanos; el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; el artículo 26 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo 14.1 del Protocolo Adicional a la Convención Americana sobre Derechos Humanos en Materia de Derechos Económicos, Sociales y Culturales “Protocolo de San Salvador”; así como en el artículo 4°, párrafo noveno de la Constitución Política del país.
41. El primer instrumento internacional en el que se hizo referencia al derecho a la cultura es la **Declaración Universal de Derechos**

La cultura toma diversas formas a través del tiempo y del espacio. Esta diversidad se manifiesta en la originalidad y la pluralidad de identidades que caracterizan los grupos y las sociedades que componen la humanidad. Fuente de intercambios, innovación y creatividad, la diversidad cultural es, para el género humano, tan necesaria como la diversidad biológica para los organismos vivos. En este sentido, constituye patrimonio común de la humanidad y debe reconocerse y consolidarse en beneficio de las generaciones presentes y futuras.

¹⁴ La Declaración de Friburgo fue redactado para la UNESCO por un grupo internacional de trabajo conocido como el “Grupo de Friburgo” organizado a partir del Instituto Interdisciplinario de Ética y Derechos Humanos de la Universidad de Friburgo, Suiza.

¹⁵ **Artículo 2 (definiciones) Para los fines de la presente Declaración:**

- a. El término "cultura" abarca los valores, las creencias, las convicciones, los idiomas, los saberes y las artes, las tradiciones, instituciones y modos de vida por medio de los cuales una persona o un grupo expresa su humanidad y los significados que da a su existencia y a su desarrollo;
- b. La expresión "identidad cultural" debe entenderse como el conjunto de referencias culturales por el cual una persona, individual o colectivamente, se define, se constituye, comunica y entiende ser reconocida en su dignidad ;
- c. Por "comunidad cultural" se entiende un grupo de personas que comparten las referencias constitutivas de una identidad cultural común, que desean preservar y desarrollar.

Humanos¹⁶, en particular, en sus artículos 22 y 27. Dichos artículos establecen que toda persona como miembro de la sociedad tiene derecho a obtener la satisfacción de los derechos económicos, sociales y culturales, indispensables a su dignidad y al libre desarrollo de su personalidad. Así, toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten.

42. Por su parte, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en su artículo 15 reconoce el derecho de toda persona a: i) participar en la vida cultural; ii) gozar de los beneficios del progreso científico y de sus aplicaciones; iii) beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora; y iv) la libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
43. Asimismo, el Pacto Internacional señala que, para asegurar el pleno ejercicio de este derecho, los Estados deberán adoptar las medidas necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia y la cultura.
44. Al respecto, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, en su Observación General Número 21, recalcó que la promoción y respeto de los derechos culturales son esenciales para mantener la dignidad humana y para la interacción social positiva de individuos y comunidades en un mundo caracterizado por la diversidad y la pluralidad cultural¹⁷.

¹⁶ Asamblea General de las Naciones Unidas, *Declaración Universal de los Derechos Humanos*, 10 de diciembre de 1948, Resolución 217 A (III)

¹⁷ Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, *Observación General No. 21. Derecho de toda persona a participar en la vida cultural (artículo 15, párrafo*

45. De igual forma, el Comité señaló que para ejercer el derecho a participar en la vida cultural es necesario que el Estado tome medidas positivas como asegurarse de que existan las condiciones previas para hacerlo, promoverla, facilitarla, y dar acceso a los bienes culturales y preservarlos. En ese sentido, el derecho a participar en la vida cultural está compuesto por: i) la participación en la vida cultural; ii) el acceso a la vida cultural; y iii) la contribución a la vida cultural¹⁸.
46. Para efectos del presente caso es relevante el acceso a la vida cultural, el cual comprende el derecho de toda persona a conocer y comprender su propia cultura y la de otros. Es decir, toda persona tiene también derecho a conocer formas de expresión y difusión por cualquier medio tecnológico de información y comunicación, así como a beneficiarse del patrimonio cultural y de las creaciones de otros individuos y comunidades.
47. El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales destacó que el derecho a participar en la vida cultural debe ser disponible y accesible. La disponibilidad es la presencia de bienes y servicios culturales que todo el mundo pueda disfrutar y aprovechar, en particular, **bibliotecas**, museos, teatros, salas de cine, etcétera; mientras que la accesibilidad implica disponer de oportunidades efectivas y concretas para que los individuos y las comunidades disfruten plenamente de una cultura que esté al alcance físico y financiero de todas las personas¹⁹.

1 a) del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales), 21 de diciembre de 2009, E/C.12/GC/21, párr. 1.

¹⁸ *Ibidem*, párr. 15.

¹⁹ *Ibidem*, párr. 16.

48. En el ámbito interamericano, la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en su artículo 26, señala que los Estados se comprometen a adoptar providencias para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa y otros medios apropiados²⁰.
49. De igual forma, el artículo 14.1 del Protocolo de San Salvador reconoce el derecho a la cultura en los mismos términos que el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, al señalar que toda persona tiene derecho a participar en la vida cultural y artística de la comunidad; a gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico; y a beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de las que sea autora²¹.

²⁰ **Artículo 26. Desarrollo Progresivo**

Los Estados Partes se comprometen a adoptar providencias, tanto a nivel interno como mediante la cooperación internacional, especialmente económica y técnica, para lograr progresivamente la plena efectividad de los derechos que se derivan de las normas económicas, sociales y sobre educación, ciencia y cultura, contenidas en la Carta de la Organización de los Estados Americanos, reformada por el Protocolo de Buenos Aires, en la medida de los recursos disponibles, por vía legislativa u otros medios apropiados.

²¹ **Artículo 14. Derecho a los beneficios de la cultura**

1. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen el derecho de toda persona a:
 - a. participar en la vida cultural y artística de la comunidad;
 - b. gozar de los beneficios del progreso científico y tecnológico;
 - c. beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.
2. Entre las medidas que los Estados partes en el presente Protocolo deberán adoptar para asegurar el pleno ejercicio de este derecho figurarán las necesarias para la conservación, el desarrollo y la difusión de la ciencia, la cultura y el arte.
3. Los Estados partes en el presente Protocolo se comprometen a respetar la indispensable libertad para la investigación científica y para la actividad creadora.
4. Los Estados partes en el presente Protocolo reconocen los beneficios que se derivan del fomento y desarrollo de la cooperación y de las relaciones internacionales en cuestiones científicas, artísticas y culturales, y en este sentido se comprometen a propiciar una mayor cooperación internacional sobre la materia.

50. En el ámbito nacional, el artículo 4º, párrafo doce, de la Constitución Política del país establece que toda persona tiene derecho al acceso a la cultura y al disfrute de los bienes y servicios que presta el Estado en la materia, así como el ejercicio de sus derechos culturales. Por lo tanto, dicho artículo precisa que el Estado promoverá los medios para la difusión y el desarrollo de la cultura, atendiendo a la diversidad cultural en todas sus manifestaciones y a las expresiones con pleno respeto a la libertad creativa, para lo cual, la ley establecerá los mecanismos para el acceso y participación a cualquier manifestación cultural.
51. En ese sentido, del artículo constitucional citado anteriormente, se advierte el reconocimiento del acceso, la promoción, la difusión, el respeto y la protección de la cultura, en sentido amplio.
52. En virtud de lo anterior esta Primera Sala considera que el derecho a la cultura tiene tres vertientes o facetas: **i)** como un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales; **ii)** como un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y **iii)** como un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho universal, indivisible e interdependiente²².

²² Amparo directo 11/2011, resuelto el dos de mayo de dos mil doce, por mayoría de tres votos de los Ministros José Ramón Cossío Díaz, Arturo Zaldívar Lelo de Larrea y Ministra Olga Sánchez Cordero de García Villegas (Ponente). En contra, Ministros Jorge Mario Pardo Rebolledo y Guillermo I. Ortiz Mayagoitia.

Amparo en revisión 566/2015, resuelto el quince de febrero de dos mil diecisiete, por mayoría de tres votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo y Ministra Norma Lucía Piña Ramos. En contra, Ministro José Ramón Cossío Díaz. Ausente, Ministro Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. De este asunto derivó la tesis 1a. CXXI/2017 (10a.) de rubro “**DERECHO DE ACCESO A BIENES Y SERVICIOS CULTURALES. ES UNA VERTIENTE DEL DERECHO A LA CULTURA.** La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como diversos organismos internacionales han sostenido que el derecho a la cultura es un derecho polifacético que considera tres vertientes: 1) un derecho que tutela el acceso a los bienes y servicios culturales; 2) un derecho que protege el uso y disfrute de los mismos; y, 3) un derecho que protege la producción intelectual, por lo que es un derecho universal, indivisible e interdependiente. El

- 53.** Derivado de lo anterior el Estado debe garantizar y promover la libre emisión, recepción y circulación de la cultura, tanto en el aspecto individual (como elemento esencial de la persona), como en el colectivo y social, dentro de la cual debe entenderse comprendida la difusión de múltiples valores, tanto históricos, tradicionales, populares y la obra de los artistas, escritores, y científicos del país, entre muchas manifestaciones del quehacer humano con un carácter formativo de la identidad en ambos aspectos: individual y social o nacional.
- 54.** El derecho a la cultura es inherente a la dignidad de la persona humana, por lo que debe interpretarse acorde con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad, debiéndose garantizar tanto su acceso como a su participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo colectivo como en lo individual.
- 55.** Dicho derecho no es absoluto o irrestricto, sino que encuentra ciertos límites, cuando genera una relación con el ejercicio de otros derechos, pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos también protegidos de manera constitucional, por ejemplo el sano desarrollo de la infancia, la libertad de creencias, de reunión o de tránsito, todo lo cual estará

Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales estableció que la realización del derecho a participar en la vida cultural requiere, entre otras cosas, la presencia de bienes y servicios culturales que todas las personas puedan aprovechar, como bibliotecas, museos, teatros, salas de cine y estadios deportivos; la literatura y las artes en todas sus manifestaciones. De esta manera, esas fuentes son consistentes en entender que del derecho a la cultura se desprende un derecho prestacional a tener acceso a bienes y servicios culturales.”

en su caso, sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate²³.

56. Ahora bien, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales señaló, en la citada Observación General Número 21, que los Estados tienen la obligación de adoptar medidas concretas para lograr que se respete el derecho de toda persona a tener acceso a su patrimonio cultural y lingüístico y al de otras personas.
57. El patrimonio cultural ha sido definido como “*el legado que recibimos del pasado, que vivimos en el presente y que transmitiremos a las generaciones futuras*”. Por lo tanto, el patrimonio cultural comprende las obras de sus artistas, arquitectos, músicos, escritores y sabios, así como las creaciones anónimas, surgidas del alma popular, y el conjunto de valores que dan un sentido a la vida. Es decir, las obras materiales y no materiales que expresan la creatividad de ese pueblo: la lengua, los ritos, las creencias, los lugares y monumentos históricos, la literatura, las obras de arte, los archivos y las **bibliotecas**²⁴.

²³ Tesis 1a. CCVII/2012 (10a.) de rubro y contenido: “**DERECHO FUNDAMENTAL A LA CULTURA.** El derecho a la cultura, establecido en el penúltimo párrafo del artículo 4o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, **es inherente a la dignidad de la persona humana, y en virtud de su naturaleza de derecho fundamental, debe interpretarse armónicamente con los principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad** a que se refiere el párrafo tercero del artículo 1o. de la Constitución General de la República; debiéndose garantizar tanto su acceso, como su participación sin discriminación alguna y respetándose en su máxima expresión, tanto en lo individual como en lo colectivo. Sin embargo, como cualquier derecho humano, no es absoluto o irrestricto, pues si bien en su formulación o enunciación normativa no contiene límites internos, como todos los derechos **encuentra ciertos límites de manera externa, que implica su relación con el ejercicio de otros derechos, pues carecería de legitimidad constitucional que bajo el auspicio de una expresión o manifestación cultural se atentara contra otra serie de derechos** también protegidos de manera constitucional, lo cual estará, en su caso, sujeto a valoración o a ponderación en el caso particular de que se trate.”

Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Libro XII, septiembre de 2012, tomo 1, página 502, derivada del amparo directo 11/2011, véase *supra* nota 26.

²⁴ Conferencia Mundial sobre las Políticas Culturales, *Declaración de México sobre las Políticas Culturales*, *op. cit.* párr. 23.

58. Así, el patrimonio cultural debe ser preservado, desarrollado, enriquecido y transmitido a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y las aspiraciones humanas, a fin de nutrir la creatividad en toda su diversidad y alentar un verdadero diálogo entre las culturas²⁵.
59. Por esa razón, la **figura del depósito legal** cobra especial importancia, pues permite recoger ejemplares de todas las publicaciones con el fin de preservar el patrimonio bibliográfico, sonoro, visual, audiovisual y digital, así como permitir el acceso al mismo. La creación de estos depósitos está estrechamente relacionada con el acceso a bienes culturales y con el conocimiento acumulado.
60. Al respecto, el Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe, bajo el auspicio de la UNESCO ha señalado que las actividades de conservación deben apuntar a la recolección del mayor número de obras con valor histórico, artístico, científico, literario o cultural de la nación, como una muestra representativa del universo creativo gestado en el país. Lo anterior puede incluir contenidos editoriales y documentos distribuidos en formato físico, contenidos editoriales y documentos en formato electrónico, contenidos editoriales y documentos puestos a disposición en el entorno digital vía *streaming* o para descarga directa y contenidos multimedia, transmedia y *web*²⁶.

²⁵ Declaración Universal sobre la Diversidad Cultural **Artículo 7. Patrimonio Cultural fuente de creatividad.**

La creatividad tiene sus orígenes en las tradiciones culturales pero se desarrolla plenamente en contacto con otras culturas. Por esta razón el patrimonio, en todas sus formas, debe preservarse, valorizarse y transmitirse a las generaciones futuras como testimonio de la experiencia y aspiraciones humanas, a fin de estimular la creatividad en toda su diversidad e inspirar un verdadero diálogo entre culturas.

²⁶ Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe bajo los auspicios de la UNESCO, *Recomendaciones para la actualización de las normas sobre depósito legal en América Latina*, Cerlalc-Unesco, junio de 2019, p. 10.

61. Asimismo, ha precisado que la figura del depósito legal debe ser una obligación legal para los productores y editores de contenido y que no puede estar supeditado al arbitrio de particulares ni depender de la buena voluntad de estos, pues de lo contrario, las obras serían parte de los acervos bibliográficos porque así lo decidieron sus editores y no como resultado de un proceso objetivo de curaduría de contenidos en el que se evalúe y priorice el valor patrimonial²⁷.
62. La exigencia del depósito se debe basar en la generación de una cultura de respeto a esta medida por medio de un proceso de sensibilización, en la cual se dé a conocer que el depósito no atenta contra la normal explotación de las obras ni facilita los actos de piratería, sino que contribuye a la conservación del patrimonio cultural²⁸.
63. Por lo tanto, esta Primera Sala considera que el depósito legal es una figura mediante la cual se conserva el patrimonio cultural de los pueblos y se garantiza a todas las personas el ejercicio de sus derechos culturales, por lo que es de suma importancia para la humanidad.

(iii) Análisis del caso concreto

64. Esta Primera Sala considera que no le asiste la razón a la empresa quejosa en cuanto a que el sistema normativo que regula la figura del depósito legal de la Ley General de Bibliotecas contraviene sus derechos de autor en las vertientes de los derechos de comunicación pública y reproducción.

²⁷ *Íbidem*, p. 11.

²⁸ *Íbidem*, p. 20.

65. Tampoco asiste la razón en cuanto a que la persona juzgadora estaba obligada aplicar la regla de los tres pasos. Aunado a que la decisión adoptada en la sentencia recurrida es jurídicamente correcta, por lo que no se aprecia una inadecuada aplicación del examen de proporcionalidad.
66. Es así, porque, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que para verificar si algún derecho humano reconocido por la Constitución Política del país o por los tratados internacionales de los que el Estado mexicano es parte se ha transgredido, el juzgador puede emplear diversos métodos o herramientas argumentativas que lo ayuden a constatar si existe o no la violación alegada. La persona juzgadora está facultada para decidir cuál es, en su opinión, el método más adecuado para resolver el asunto sometido a su conocimiento.
67. No está en debate el hecho de que los autores, editores o productores, titulares de los derechos de autor y/o conexos, tienen reconocido en diversas normas convencionales, derechos patrimoniales exclusivos en relación con *la comunicación pública, y puesta a disposición del público* de sus obras, tal como lo confirman las normas que invoca la parte quejosa, a saber: el artículo 8 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre el Derecho de Autor²⁹ y el artículo 14 del Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre la

²⁹ **Artículo 8. Derecho de comunicación al público**

Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1) ii), 11 bis. 1) i) y ii), 11ter.1) ii), 14.1) ii) y 14bis. 1) del Convenio de Berna, los autores de obras literarias y artísticas gozarán del derecho exclusivo de autorizar cualquier comunicación al público de sus obras por medios alámbricos o inalámbricos, comprendida la puesta a disposición del público de sus obras, de tal forma que los miembros del público puedan acceder a estas obras desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

Interpretación o Ejecución y Fonogramas³⁰, y los artículos 20.59 y 20.62 del Tratado México-Estados Unidos-Canadá³¹, de los que se colige sin lugar a duda que se trata de un derecho exclusivo del que gozan los autores, intérpretes y productores, consistente en la facultad de autorizar que sus obras y fonogramas sean puestos a disposición del público, de tal manera que, incluso, puedan tener acceso a ellas en forma remota desde el lugar y en el momento que cada uno elija, como sucede, por ejemplo, con las plataformas digitales de reproducción de audio y video, o bien, de prohibir dicha puesta a disposición. Sin embargo, lo cierto es que, la Ley General de Bibliotecas respeta los derechos de comunicación pública y reproducción.

68. Es claro que el depósito legal establecido en la Ley General de Bibliotecas va más allá de la mera conservación pues pretende la difusión de las obras a través de la red de bibliotecas, sin que ese proceder implique en automático y en todos los casos que las obras se comunicarán de forma pública; mucho menos que se esté frente

³⁰ **Artículo 14. Derecho de poner a disposición los fonogramas**

Los productores de fonogramas gozarán del derecho exclusivo a autorizar la puesta a disposición del público de sus fonogramas ya sea por hilo o por medios inalámbricos, de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellos desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

³¹ **Artículo 20.59: Derecho de Comunicación al Público**

Sin perjuicio de lo previsto en los Artículos 11.1) ii), 11 bis. 1) i) y ii), 11ter.1) ii), 14.1) ii) y 14bis. 1) del Convenio de Berna, cada Parte otorgará a los autores el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la comunicación al público de sus obras, por medios alámbricos o inalámbricos, incluyendo la puesta a disposición del público de sus obras de tal forma que los miembros del público puedan tener acceso a esas obras desde el lugar y en el momento en que cada uno de ellos elija.

Artículo 20.62: Derechos conexos.

(...)

3. (a) Cada Parte otorgará a los artistas intérpretes o ejecutantes y a los productores de fonogramas el derecho exclusivo de autorizar o prohibir la radiodifusión o cualquier comunicación al público de sus interpretaciones o ejecuciones o fonogramas. ya sea por medios alámbricos o inalámbricos, y la puesta a disposición del público de esas interpretaciones o ejecuciones o fonogramas de tal manera que los miembros del público puedan tener acceso a ellas desde el lugar y en el momento que cada uno de ellos elija.

a una reproducción irrestricta y sin control alguno por medios electrónicos o internet.

69. Así, la palabra “reproducción”, en su sentido corriente, refiere a una cosa que reproduce o copia un original. El Tratado sobre Derechos de Autor de la OMPI, un Acuerdo en el sentido del artículo 20 del Convenio de Berna y del artículo 31. 2) (a) de la Convención de Viena, es útil para llegar a la conclusión anterior. El artículo 10 del citado instrumento distingue en el ámbito de aplicación de la “regla de tres” dentro del Convenio de Berna y dentro del propio Tratado.
70. Lo anterior nos permite inferir, cuando menos, que el Convenio de Berna pretende adjudicar un significado específico al término “reproducción”. Por último, se puede acudir al artículo 3 de la Convención de Roma, administrada por la OMPI, **en la cual se define el término reproducción como la realización de uno o más ejemplares de una fijación.** Recordando que, la Ley Federal del Derecho de Autor entiende “reproducción” como *“la realización de uno o varios ejemplares de una obra, de un fonograma o de un videograma, en cualquier forma tangible, incluyendo cualquier almacenamiento permanente o temporal por medios electrónicos”* **se puede entender que la expresión “reproducción” del Convenio de Berna se equipara la de la Ley.**
71. Es claro que los derechos de comunicación pública y de reproducción están sujetos a protección por las normas del derecho internacional e interno, de manera específica en la Ley Federal del Derecho de Autor.
72. Es importante destacar que el artículo 37 de la Ley General de Bibliotecas impone a los editores y a los productores de los

materiales³², a los que se refieren los diversos artículos 33 y 34³³, la **obligación de entregar ejemplares de dichos materiales a las instituciones depositarias** para la conformación del depósito legal.

- 73.** El artículo 33 establece que el depósito legal se conforma con las obras de contenido educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento, distribuidas para su comercialización o de manera gratuita, en formatos impresos o electrónicos, analógicos o digitales, en el territorio nacional.
- 74.** Por su parte, el artículo 34 señala, en forma enunciativa y no limitativa, que las obras que conforman el depósito legal pueden ser libros, publicaciones periódicas, catálogos, folletos y pliegos; publicaciones periódicas como periódicos, diarios, anuarios, revistas y memorias; material cartográfico como mapas y planos,

³² **Artículo 37.** Todos los editores y productores de los materiales mencionados en los artículos 33 y 34 de esta Ley, deberán entregar ejemplares de todas sus ediciones y producciones, de acuerdo con lo siguiente:

- I. Dos ejemplares a la Biblioteca de México;
- II. Dos ejemplares a la Biblioteca del Congreso de la Unión, y
- III. Dos ejemplares a la Biblioteca Nacional de México.

En el caso de las obras publicadas en formatos electrónico, analógico o digital, se entregará un solo ejemplar por institución con los materiales complementarios que permitan su consulta y preservación.

³³ **Artículo 33.** Se declara de interés público la recopilación, integración, almacenamiento, custodia y conservación de toda obra de contenido educativo, cultural, científico, técnico o de esparcimiento, distribuida para su comercialización o de manera gratuita, en formatos impreso o electrónico, analógico o digital, en el territorio nacional. El conjunto de obras recopiladas constituye el Depósito Legal.

Artículo 34. Las obras a que se refiere el artículo anterior podrán ser, de manera enunciativa y no limitativa, las siguientes:

- I. Libros, publicaciones periódicas, catálogos, folletos y pliegos;
- II. Publicaciones periódicas como periódicos, diarios, anuarios, revistas y memorias;
- III. Material cartográfico como mapas y planos, cartas de navegación, aeronáuticas o celestes;
- IV. Partituras;
- V. Fonogramas, discos y cintas;
- VI. Obras audiovisuales, micropelículas, diapositivas y fotografías;
- VII. Material gráfico, carteles y diagramas, y
- VIII. Cualquier otra que se considere relevante para documentar la memoria del conocimiento en el territorio nacional.

cartas de navegación, aeronáuticas o celestes; partituras; fonogramas, discos y cintas; obras audiovisuales, micropelículas, diapositivas y fotografías; material gráfico, carteles y diagramas; y cualquier otra que se considere relevante para documentar la memoria del conocimiento en el territorio nacional.

75. Adicionalmente, es importante tomar en consideración que el depósito legal no sólo se establece con el propósito de almacenar, custodiar y conservar las referidas obras, pues, conforme a lo dispuesto por los artículos 6 primer párrafo, 37 último párrafo, 38 y 40, fracción III, de la Ley General de Bibliotecas³⁴, los ejemplares que conforman el depósito legal pueden quedar a disposición de los usuarios de los servicios bibliotecarios para su consulta pública.
76. De lo anterior se deduce que el **artículo 37 de la Ley General de Bibliotecas tiene una incidencia directa en materiales que se encuentran protegidos por el derecho de autor.**
77. En efecto, el artículo 3° de la Ley Federal del Derecho de Autor señala como objeto de protección de esa ley las obras de creación

³⁴ **Artículo 6.** Los usuarios de las bibliotecas públicas harán uso de los servicios bibliotecarios sin más límite que los establecidos por las disposiciones reglamentarias sobre consulta de acervos y visita pública. Los responsables de las bibliotecas públicas en ningún caso podrán condicionar el acceso a dichos servicios, con independencia del uso que cada usuario haga de la información a la que tenga acceso. [...]

Artículo 37. Todos los editores y productores de los materiales mencionados en los artículos 33 y 34 de esta Ley, deberán entregar ejemplares de todas sus ediciones y producciones, de acuerdo con lo siguiente: [...]

En el caso de las obras publicadas en formatos electrónico, analógico o digital, se entregará un solo ejemplar por institución con los materiales complementarios que permitan su **consulta** y preservación.

Artículo 38. Cada uno de los repositorios del Depósito Legal, establecerá sus políticas de almacenamiento, custodia, conservación y **consulta pública**, con base en las disposiciones aplicables.

Artículo 40. Las instituciones receptoras del Depósito Legal deberán: [...]

III. Establecer las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales recibidos, la prestación de los servicios bibliotecarios y, en su caso, de **consulta pública**; [...]

original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio³⁵.

78. Así, el artículo 13 de la referida ley federal dispone que los derechos de autor se reconocen respecto obras literarias; musicales, con o sin letra; dramáticas; de danza; pictóricas o de dibujo; escultórica y de carácter plástico; de caricatura e historieta; arquitectónicas; cinematográficas y demás obras audiovisuales; programas de radio y televisión; programas de cómputo; fotográficas; de arte aplicado, incluyendo el diseño gráfico o textil; de compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como enciclopedias, antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que constituyan una creación intelectual; y las demás que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas³⁶.

³⁵ **Artículo 30.-** Las obras protegidas por esta Ley son aquellas de creación original susceptibles de ser divulgadas o reproducidas en cualquier forma o medio.

³⁶ **Artículo 13.-** Los derechos de autor a que se refiere esta Ley se reconocen respecto de las obras de las siguientes ramas:

I. Literaria;

II. Musical, con o sin letra;

III. Dramática;

IV. Danza;

V. Pictórica o de dibujo;

VI. Escultórica y de carácter plástico;

VII. Caricatura e historieta;

VIII. Arquitectónica;

IX. Cinematográfica y demás obras audiovisuales;

X. Programas de radio y televisión;

XI. Programas de cómputo;

XII. Fotográfica;

XIII. Obras de arte aplicado que incluyen el diseño gráfico o textil, y

XIV. De compilación, integrada por las colecciones de obras, tales como las enciclopedias, las antologías, y de obras u otros elementos como las bases de datos, siempre que dichas colecciones, por su selección o la disposición de su contenido o materias, constituyan una creación intelectual.

Las demás obras que por analogía puedan considerarse obras literarias o artísticas se incluirán en la rama que les sea más afín a su naturaleza.

79. Por lo anterior, esta Primera Sala considera que el sistema normativo que regula la figura del depósito legal, conformado por los artículos 1°, fracción IV, 6°, 37, 38, 39 y 40, fracción III, de la Ley General de Bibliotecas, **debe ser analizado a luz del parámetro de regularidad constitucional en materia de derechos de autor**, pues dicho sistema genera obligaciones a los editores y a los productores respecto de los materiales que se encuentran protegidos por el derecho de autor, por lo que tienen una incidencia directa en el ejercicio de los derechos inherentes a esa materia
80. Al respecto, esta Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que los derechos de autor, junto con los de propiedad industrial, conforman el denominado **derecho a la propiedad intelectual**, el cual constituye una vertiente del derecho humano a la propiedad (reconocido por los artículos 27 constitucional y 21 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos³⁷), y que cuenta con un reconocimiento específico en los artículos 28, décimo párrafo³⁸, de la Constitución Política del país y 15.1, inciso

³⁷**Artículo 27.** La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. [...]

Artículo 21. Derecho a la Propiedad Privada

1. Toda persona tiene derecho al uso y goce de sus bienes. La ley puede subordinar tal uso y goce al interés social.
2. Ninguna persona puede ser privada de sus bienes, excepto mediante el pago de indemnización justa, por razones de utilidad pública o de interés social y en los casos y según las formas establecidas por la ley.
3. Tanto la usura como cualquier otra forma de explotación del hombre por el hombre, deben ser prohibidas por la ley.

³⁸**Artículo 28.** [...]

Tampoco constituyen monopolios los privilegios que por determinado tiempo se concedan a los autores y artistas para la producción de sus obras y los que para el uso exclusivo de sus inventos, se otorguen a los inventores y perfeccionadores de alguna mejora.

c)³⁹, del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales⁴⁰.

- 81.** En términos similares, la Corte Interamericana de Derechos Humanos ha sostenido que el derecho a la propiedad que reconoce la Convención Americana sobre Derechos Humanos también incluye a “*las obras producto de la creación intelectual de una persona, quien, por el hecho de haber realizado esa creación adquiere sobre ésta derechos de autor conexos con el uso y goce de la misma*”⁴¹.
- 82.** Así, el Estado mexicano ha suscrito diversos tratados que contienen disposiciones relativas a los derechos de autor, las cuales forman parte del parámetro de regularidad constitucional en la materia, en términos de lo dispuesto por el artículo 1º, segundo párrafo, de la Constitución Política del país⁴², y por la doctrina de este alto tribunal⁴³.

³⁹ **Artículo 15**

1. Los Estados Partes en el presente Pacto reconocen el derecho de toda persona a:
[...]

c) Beneficiarse de la protección de los intereses morales y materiales que le correspondan por razón de las producciones científicas, literarias o artísticas de que sea autora.

⁴⁰ Véase Tesis 1a. CLXXVIII/2018 (10a.), con el rubro: “DERECHO A LA PROPIEDAD INTELECTUAL. SU CONCEPTUALIZACIÓN COMO VERTIENTE DEL DERECHO A LA PROPIEDAD Y SUS MANIFESTACIONES DE CARÁCTER PATRIMONIAL”. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 61, diciembre de 2018, tomo I, pág. 287, registro digital: 2018640. Criterio reiterado en el amparo directo en revisión 752/2020, resuelto el tres de noviembre de dos mil veintiuno, por mayoría de cuatro votos de la Ministra Ana Margarita Ríos Farjat y de los Ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá (Ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. En contra, la Ministra Norma Lucía Piña Hernández (véase párr. 117 del engrose).

⁴¹ Corte IDH. *Caso Palamara Iribarne vs. Chile*. Fondo, Reparaciones y Costas. Sentencia de 22 de noviembre de 2005. Serie C No. 135, párr. 102.

⁴² **Artículo 1º**. [...]

Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en todo tiempo a las personas la protección más amplia.

⁴³ Véanse las jurisprudencias de la Primera Sala:

83. Particularmente, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Derecho de Autor, el Tratado de la Organización Mundial de la Propiedad Intelectual sobre Interpretación o Ejecución de Fonogramas, el Tratado entre los Estados Unidos Mexicanos, los Estados Unidos de América y Canadá.
84. En ese sentido, como se adelantó, la interpretación de los artículos **1º, fracción IV, 6º, 37, 38, 39 y 40, fracción III, de la Ley General de Bibliotecas que resulta conforme con el parámetro de regularidad constitucional, es la que implica que las obras entregadas para la constitución del depósito legal estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y en los tratados internacionales en la materia, para todo lo relativo con su consulta, copia, digitalización y, en su caso, reproducción.**
85. Al respecto, es criterio reiterado de este alto tribunal que cuando se está frente a dos interpretaciones de una norma, en la que una es

1a./J. 29/2015 (10a.), con el rubro: “DERECHOS HUMANOS RECONOCIDOS TANTO POR LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS, COMO EN LOS TRATADOS INTERNACIONALES. PARA DETERMINAR SU CONTENIDO Y ALCANCE DEBE ACUDIRSE A AMBAS FUENTES, FAVORECIENDO A LAS PERSONAS LA PROTECCIÓN MÁS AMPLIA”. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 17, abril de 2015, tomo I, pág. 240, registro digital: 2008935, último precedente: Amparo directo en revisión 3113/2014. 28 de enero de 2015. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Arturo Zaldívar Lelo de Larrea. Secretario: Julio César Ramírez Carreón; y

1a./J. 37/2017 (10a.), con el rubro: “INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA”. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, libro 42, mayo de 2017, tomo I, pág. 239, registro digital: 2014332, último precedente: Amparo directo en revisión 2177/2014. Instituto Mexicano del Seguro Social. 19 de noviembre de 2014. Cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz, Jorge Mario Pardo Rebolledo, Olga Sánchez Cordero de García Villegas y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena. Ponente: Jorge Mario Pardo Rebolledo.

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

constitucional a partir de una interpretación conforme y la otra resulta inválida, debe preferirse aquella que salva la validez de los artículos impugnados⁴⁴.

86. Es decir, antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita subsistir dentro del ordenamiento, de manera que solo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable se procedería a declararla inconstitucional.
87. La interpretación de las normas conforme a la Constitución se fundamenta en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador.
88. En ese sentido, la interpretación propuesta en el presente asunto es la que salva la constitucionalidad de las normas al leerse de conformidad con la normativa nacional e internacional del derecho de autor, de tal forma que permite, a su vez, garantizar el derecho a la cultura de la población y es acorde con la intención del poder legislativo.
89. En efecto, dicha interpretación conforme hace efectivo el derecho de participar en la vida cultural, en especial su acceso, que comprende el conocer y comprender su propia cultura y la de otros,

⁴⁴ Jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.) de rubro: “INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA”. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, mayo de 2017, tomo I, página 239.

Tesis P. II/2017 (10a.) de rubro: “INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA”, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo I, página 161.

así como beneficiarse del patrimonio cultural y las creaciones de otros individuos y comunidades.

90. Además, garantiza la protección del patrimonio cultural mediante la implementación de la figura del depósito legal, que como ya se señaló debe preservarse, desarrollarse, enriquecerse y transmitirse a las generaciones futuras.
91. Y, como se adelantó, esta Primera Sala considera que la interpretación precisada en la presente ejecutoria **es la que resulta más acorde con la voluntad del poder legislativo** plasmada en el proceso que dio origen a la Ley General de Bibliotecas.
92. En la exposición de motivos de la iniciativa presentada por el Senador Cruz Pérez Cuellar se señala que el objeto es fortalecer el papel de las bibliotecas públicas como motores del desarrollo educativo y cultural de las comunidades. Por su parte, en la exposición de motivos de la Iniciativa presentada por diversos integrantes de la LXIV Legislatura del Senado se expuso que el depósito legal constituye una forma de reunir la herencia del pensamiento y la reflexión intelectual.
93. En el Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos del Senado de la República se precisó que la figura del depósito legal es un mecanismo de gran tradición en muchos países que ha permitido constituir un acervo editorial de grandes proporciones, útil a la investigación y que constituye un patrimonio cultural que da cuenta del trabajo editorial desarrollado en nuestro país a lo largo del tiempo.
94. Asimismo, en la consideración Trigésima Quinta del Dictamen, se dispone que, con el depósito legal, el Estado es depositario de los

libros y publicaciones en el país, pero más allá de la sola compilación, es el custodio de la historia de las ideas y el pensamiento nacional e internacional sobre los que se lee en México.

95. En la consideración Trigésima Octava del Dictamen de las Comisiones Unidas de Cultura y de Estudios Legislativos del Senado de la República claramente se establece que las obras entregadas para la constitución del depósito legal estarán sujetas a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor para todo lo relativo con su consulta, copia, digitalización y, en su caso, reproducción⁴⁵.
96. A juicio de este alto tribunal, esa intención quedó plasmada en el **artículo 38** de la Ley General de Bibliotecas, el cual dispone que cada institución depositaria establecerá las políticas para la consulta pública de las obras que forman el depósito legal **“con base en las disposiciones aplicables”**. Esta porción normativa debe interpretarse en el sentido de que se refiere no sólo a las disposiciones aplicables de la Ley Federal del Derecho de Autor, como sostuvo el Juez de Distrito en la sentencia recurrida, sino también a las disposiciones relativas a derechos de autor contenidas en los tratados internacionales de los que es parte del Estado mexicano.

⁴⁵ **TRIGÉSIMA OCTAVA.** De la misma forma, los libros o publicaciones, sin distinción de acervos o bibliotecas, para efectos de su consulta, copia, digitalización y, en su caso, reproducción, estarán sujetos a las disposiciones de la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual establece disposiciones específicas para los autores y titulares de los derechos conexos (editores, diseñadores e ilustradores, entre otros). En el caso de los libros integrados a los acervos públicos por la vía del Depósito Legal, su consulta, incluso, será específica al ejemplar entregado y, salvo licencias convenidas con los titulares de los derechos, sólo podrá ser objeto de digitalización para fines de conservación, salvo aquellos cuyos derechos han expirado o se encuentren en condición de dominio público.

- 97.** De igual forma, como lo señaló la Segunda Sala en los amparos en revisión 132/2022 y 164/2022⁴⁶, la Ley General de Bibliotecas es de observancia general en toda la República, pues sus disposiciones son de orden público e interés social, ya que la misma tiene por objeto, entre otros, fomentar y garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín, estableciendo instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo.
- 98.** Por lo tanto, dicha ley establece la obligación de los editores, de los autores y de los productores de entregar sus obras, ya sea en formatos físicos, electrónicos, analógicos o digitales, a un depósito legal, así como la forma y el plazo en que deben entregarse para documentar la memoria del conocimiento en el territorio nacional y, en su caso, permitir al público usuario su consulta. De igual manera, establece las obligaciones que tienen las instituciones receptoras del depósito legal para, entre otras cuestiones, fijar las medidas que sean necesarias para la debida organización de los materiales recibidos, la prestación de los servicios bibliotecarios y, se reitera, en su caso, de consulta pública.
- 99.** En ese sentido, los artículos impugnados conforman un sistema normativo que tiene por objeto, entre otros, garantizar la conservación del patrimonio documental, bibliográfico, hemerográfico, auditivo, visual, audiovisual, digital y, en general, cualquier otro medio que contenga información afín, estableciendo

⁴⁶ Los amparos en revisión 132/2022 y 164/2022 los resolvió la Segunda Sala de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación en la sesión correspondiente al veintidós de junio de dos mil veintidós por unanimidad de cuatro votos de los Ministros Alberto Pérez Dayán, Luis María Aguilar Morales, Javier Laynez Potisek y Ministra Presidenta Yasmín Esquivel Mossa (ponente). Ausente la Ministra Loretta Ortiz Ahlf.

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

instrumentos para la difusión cultural, la consolidación de la memoria comunitaria y el progreso educativo.

- 100.** En virtud de todo lo anterior, esta Primera Sala determina que el sistema normativo que regula la figura del depósito legal, conformado por los artículos 1º, fracción IV, 6º, 37, 38, 39 y 40, fracción II de la Ley General de Bibliotecas es constitucional a partir de una interpretación conforme, al considerar que “las disposiciones aplicables” a las que se refiere el artículo 38 se refieren a aquellas que regulan los derechos y obligaciones de la Ley Federal del Derecho de Autor y los tratados internacionales en la materia.
- 101.** En ese sentido, es **infundado** que sea inconstitucional el sistema del depósito legal establecido en la Ley General de Bibliotecas. Por el contrario, es apegado a derecho que en la sentencia recurrida la persona juzgadora de amparo arribara a esa convicción, pues, como se ha evidenciado, la ley general en análisis debe comprenderse en conjunción con la Ley Federal del Derecho de Autor, incluso, en cuanto a la protección de los derechos de **comunicación pública y reproducción.**
- 102.** Esto es, si la operación del sistema normativo relativo al depósito legal de publicaciones debe observar, en todo momento, las disposiciones contenidas en la Ley Federal del Derecho de Autor, la cual otorga derechos específicos para los autores, editores y productores, ello implica que dicho sistema normativo respeta los derechos de autor y conexos, porque las instituciones depositarias no pueden eludir el texto de este último cuerpo normativo al emitir sus políticas de almacenamiento, reproducción, custodia, conservación y consulta pública.

- 103.** Además, el artículo 37 no contraviene el derecho a utilizar medidas tecnológicas de protección, puesto que ni tiene injerencia en ellas. Esto es, de ninguna manera prohíbe que las obras que se van a entregar a las instituciones depositarias deben de carecer de medios de protección digital. Ni siquiera los limita.
- 104.** A lo que hace referencia ese artículo es que cuando se tiene que entregar una obra a las instituciones depositarias y exige un medio de reproducción específico del que aquellas carecen, se debe de acompañar con los materiales complementarios que permitan su consulta y preservación.
- 105.** Esto es, en todo caso, si en un caso concreto, la obra que se produce se encuentra contenida en un dispositivo de almacenamiento como un disco compacto y la institución depositaria careciese del instrumento para reproducir ese formato, el productor deberá entregarle el instrumento con el cual pueda reproducir esa producción. Tal circunstancia en ningún momento implica que no pueda reforzarse con un medio de protección tecnológica.
- 106.** A más, cómo se observó en la interpretación del sistema normativo impugnado, lo que el legislador pretendió es que se respetasen los derechos autorales. Entre ellos, como se expuso, se encuentra el derecho de agregar medios tecnológicos de protección.
- 107.** Por lo anterior, no puede decirse que el artículo 37 de la Ley General de Bibliotecas viola los derechos autorales, en específico el derecho a utilizar medidas de protección digital, toda vez que no existe ningún impedimento para que los autores y productores puedan entregar sus obras a las instituciones depositarias con tales

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

medidas de protección tecnológicas reconocidas en los tratados internacionales de la materia.

- 108.** Cabe añadir que el artículo 39 de la Ley General de Bibliotecas dispone que se deberán depositar las obras a las instituciones que indica el artículo 36, en un plazo de 60 días a partir de que fueron editadas o producidas. Sin embargo, ello no implica que, a partir de ese momento, las institucionales depositarias tengan una facultad omnímoda para decidir sobre la divulgación o la puesta a disposición de las obras; derechos a quien sea titular de los derechos autorales patrimoniales.
- 109.** Es de reiterarse que la normativa en materia de bibliotecas no puede soslayar los derechos autorales, tales como los derechos patrimoniales a la divulgación y a la puesta a disposición del público.
- 110.** Además, debe decirse que el sistema normativo impugnado no contraviene las normas de carácter convencional, como el Tratado de la OMPI sobre el Derecho de Autor, el Tratado de la OMPI sobre interpretación o ejecución y fonogramas, el Tratado México-Estados Unidos -Canadá, el Convenio de Berna para la Protección de Obras Literarias, el Acuerdo sobre los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio Exterior o el Tratado Integral y Progresista de Asociación Transpacífica. Ello, pues, aunque en dichos tratados se reconoce el derecho de puesta a disposición, no expande el derecho de una manera tal que colisione con el texto del sistema normativo de depósito legal contenido en la Ley General de Bibliotecas.
- 111.** Por tanto, no se afectan los derechos patrimoniales de divulgación y de puesta a disposición al público, puesto que, de ninguna

manera, el sistema normativo impugnado traspasa esos derechos de la esfera jurídica de editores y productores para otorgárselos a las bibliotecas depositarias.

VI. Problema jurídico B. Establecer si la interpretación conforme de las normas reclamadas conduce a otorgar o negar el amparo

112. La Ley General de Bibliotecas es constitucional pues la entrega de ejemplares literarios como depósito legal, respeta los derechos de comunicación pública y reproducción de las obras.

113. Para sostener la conclusión anticipada corresponde desarrollar en este apartado los aspectos siguientes: **(i) Planteamiento de la parte quejosa, (ii) Parámetro de regularidad y (iii) Análisis del caso concreto.**

(i) Planteamiento de la parte quejosa.

114. En el cuarto agravio ***** argumenta que ante la interpretación conforme realizada por el juez de los artículos 34, 37, 38 y 40 que integran el sistema normativo del depósito legal, debió otorgar el amparo porque el juzgador emitió una regla interpretativa aplicable al quejoso de manera favorable.

(ii) Parámetro de regularidad

115. Una vez establecido el planteamiento de ***** , lo que corresponde es plasmar el parámetro de regularidad al que debe someterse la decisión en torno al resultado de una interpretación conforme.

- 116.** El artículo 78 de la Ley de Amparo dispone que cuando el acto reclamado sea una norma general, en la sentencia, el juez de distrito que conozca del asunto deberá determinar si es constitucional o si debe declararse inconstitucional⁴⁷.
- 117.** Si le asiste la razón a la persona quejosa, debe de concedérsele la protección de la justicia federal. De esa manera, el efecto que tendrá el amparo será que la norma se expulsará de la esfera jurídica de la parte quejosa. Si se impugnó un sistema normativo los efectos de la declaración de inconstitucionalidad se extenderán a todas aquellas normas y actos cuya validez dependa de la norma invalidada, respectivamente, en relación con la persona impetrante.
- 118.** Esto es, por virtud de la protección constitucional, se desincorpora la norma de la esfera jurídica de la quejosa para el caso concreto y para futuras posibles aplicaciones en su perjuicio. De esta manera, ninguna autoridad podrá aplicar de nueva cuenta la norma declarada como inconstitucional, en contra de aquella persona obtuvo el amparo. Con ello, lo que se pretende es que no exista una nueva vulneración en sus derechos fundamentales, tal y como la que fue materia de la controversia.
- 119.** Ahora bien, cuando por vía de amparo indirecto se impugna una norma por considerarla contraria a la constitución, el órgano jurisdiccional que conozca de ella deberá llevar a cabo una interpretación conforme. Es decir, previo que el órgano jurisdiccional considere que una norma jurídica es inconstitucional, se deben de agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con el marco constitucional y, de ser posible varias interpretaciones de la disposición, debe de

⁴⁷ **Artículo 78.** Cuando el acto reclamado sea una norma general la sentencia deberá determinar si es constitucional, o si debe considerarse inconstitucional.

preferirse la que salve la aparente contradicción con la norma fundamental. Ello, bajo el presupuesto de que la asignación de significado a la norma jurídica sea fruto de una interpretación válida: que sea derivada de algún método de interpretación jurídica, como el gramatical, el sistemático, el funcional, el histórico, entre otros.

120. Una vez que es salvada la constitucionalidad de la norma mediante el ejercicio de interpretación conforme, el juez de distrito debe determinar la constitucionalidad de la norma, en términos del citado artículo 78 de la Ley de Amparo. Esto es, juzgará que la norma no es violatoria del marco constitucional y convencional; lo que implica que no vulnera los derechos humanos del quejoso que la reclama.

121. En tal caso, la interpretación conforme que se le dio a la norma que se reclamó queda como un precedente: se establece la manera de cómo se debe de aplicar la norma, a fin de que sea acorde con el marco constitucional y convencional. Dicho precedente puede ser vertical, en tanto debe ser seguido por los órganos jurisdiccionales inferior, en los casos que determina la ley⁴⁸; como horizontal, en tanto debe de ser seguido por el propio tribunal en todos los casos futuros. Pero, fuera de los casos en que la ley establece que se deben seguir los criterios de la superioridad, tal determinación no afecta de manera alguna a otra autoridad; sobre todo, en aquellos

⁴⁸ **Artículo 222.** Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicte el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de ocho votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.

Artículo 223. Las razones que justifiquen las decisiones contenidas en las sentencias que dicten las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, constituyen precedentes obligatorios para todas las autoridades jurisdiccionales de la Federación y de las entidades federativas cuando sean tomadas por mayoría de cuatro votos. Las cuestiones de hecho o de derecho que no sean necesarias para justificar la decisión no serán obligatorias.

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

casos que no se impugna una norma con motivo de un acto de aplicación.

122. Se actualiza un supuesto distinto cuando se impugna un acto que se dictó tomando como base la interpretación de una norma que no resulta conforme con el parámetro de regularidad constitucional. Esto es, si en un momento dado existió una aplicación de la norma en un sentido que resulta contrario a la constitución y que, por ende, haya violado los derechos humanos del quejoso, se debe de otorgar el amparo, **pero por el acto de aplicación y no por la norma.** Por ende, debe precisarse que los efectos de la concesión del amparo deberán traducirse en restituir al quejoso en el derecho violado.

123. Un ejemplo de esto último es, cuando se concede el amparo para que, con libertad de jurisdicción, se emita un nuevo acto de aplicación tomando en cuenta la interpretación correcta de la norma. En ese caso existió una violación a los derechos humanos del peticionario de amparo, pero no por la norma *per se*, sino por la aplicación que se le dio en su esfera jurídica con una interpretación inconstitucional. Por ello, la eventual concesión del amparo no se otorgaría en contra de la norma sobre la cual se hizo interpretación conforme, sino contra el acto que la aplicó de manera indebida en la esfera jurídica de la persona quejosa.

124. Por el otro lado, si no se llevó a cabo una aplicación inconstitucional de una norma, no se debe otorgar la protección federal a la persona quejosa. Esto debido a que en el caso no existe una violación de derechos fundamentales contra la cual ampararlo.

- 125.** En este sentido, puede concluirse que, en amparo indirecto, el juez de distrito no debe de conceder el amparo contra aquella norma reclamada sobre la cual realizó una interpretación conforme para salvar su constitucionalidad. Ello, debido a que la norma reclamada superó el parámetro de regularidad constitucional y, en consecuencia, no viola derechos los derechos humanos del peticionario de amparo.
- 126.** A su vez, debe insistirse que el efecto que tendría la interpretación conforme no es el de otorgarle al quejoso una protección respecto de cómo debe de interpretarse esta norma en su esfera jurídica, sino que simplemente genera un precedente, ya sea vertical u horizontal, sobre la constitucionalidad de la norma, bajo un determinado ejercicio hermenéutico.
- 127.** Sin que sea óbice para la conclusión alcanzada que, si se impugnó la norma con motivo de un acto de aplicación en el cual se llevó a cabo una interpretación de la norma reclamada que no es acorde con el marco constitucional, puede llegar a otorgarse la protección constitucional pero sólo contra el acto de aplicación, bajo los efectos que se consideren pertinentes.
- 128.** En otras palabras, un control de constitucionalidad no conlleva necesariamente a que se inaplique en la esfera jurídica del quejoso. Ello, pues la inaplicación solamente se dará en los casos que la norma no salve su presunción de constitucionalidad mediante su interpretación conforme sea en sentido amplio o estricto.
- 129.** Lo anterior se sustenta en que es criterio reiterado de este alto tribunal que cuando se está frente a dos interpretaciones de una norma, en la que una es constitucional a partir de una interpretación

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

conforme y la otra resulta inválida, debe preferirse aquella que salva la validez de los artículos impugnados⁴⁹.

130. Es decir, antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita subsistir dentro del ordenamiento, de manera que solo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable se procedería a declararla inconstitucional.

131. La interpretación de las normas conforme a la Constitución se fundamenta en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador.

(iii) Análisis del caso concreto

132. Del análisis de la sentencia recurrida se constata que en ésta se estableció que los artículos 1º, fracción VI, 34, 37, 38 y 40, fracción III, de la Ley General de Bibliotecas, conforman un sistema normativo del depósito legal, que es constitucional ante su interpretación conforme con la Constitución Política del país.

133. Mediante la interpretación conforme, antes de considerar inconstitucional una norma jurídica, deben agotarse todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga

⁴⁹ Jurisprudencia 1a./J. 37/2017 (10a.) de rubro: “INTERPRETACIÓN CONFORME. NATURALEZA Y ALCANCES A LA LUZ DEL PRINCIPIO PRO PERSONA”. Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 43, mayo de 2017, tomo I, página 239.

Tesis P. II/2017 (10a.) de rubro: “INTERPRETACIÓN CONFORME. SUS ALCANCES EN RELACIÓN CON EL PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA”, Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, libro 42, mayo de 2017, tomo I, página 161.

compatible con la Constitución Política del país, por lo que, de ser posibles varias interpretaciones de la disposición, debe preferirse la que salve la aparente contradicción con la Norma Fundamental.

- 134.** La interpretación conforme tiene como punto de partida un ejercicio hermenéutico válido, derivado de una interpretación gramatical, sistemática, funcional, histórica o alguna otra⁵⁰.
- 135.** Cuando una persona juzgadora de amparo acude a la interpretación conforme para conocer los alcances de una norma y concluye que es acorde con la Constitución Política del país, lo que corresponde es negar el amparo precisamente porque el resultado interpretativo permitió salvar la alegada contradicción con la Constitución.
- 136.** Resulta de esa manera porque el otorgamiento del amparo deriva de considerar existente una contradicción insalvable entre la norma reclamada y la Constitución Política del país. Antes de considerar a una norma jurídica como constitucionalmente inválida, es necesario agotar todas las posibilidades de encontrar en ella un significado que la haga compatible con la Constitución y que le permita, por tanto, subsistir dentro del ordenamiento; de manera que sólo en el caso de que exista una clara incompatibilidad o una contradicción insalvable entre la norma ordinaria y la Constitución, procedería declararla inconstitucional.

⁵⁰ Véase al respecto la tesis 1a. CCLXIII/2018 (10a.) emitida por esta Primera Sala al resolver el amparo directo en revisión 7326/2017 en la sesión correspondiente al dieciséis de mayo de dos mil dieciocho por unanimidad de cinco votos de los Ministros Arturo Zaldívar Lelo de Larrea, José Ramón Cossío Díaz (ponente), Jorge Mario Pardo Rebolledo, Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena y Ministra Norma Lucía Piña Hernández; se encuentra publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, décima época, libro 61, diciembre de 2018, tomo I, página 337, registro digital 2018696, bajo el rubro: “INTERPRETACIÓN CONFORME Y PRINCIPIO DE INTERPRETACIÓN MÁS FAVORABLE A LA PERSONA. SU APLICACIÓN TIENE COMO PRESUPUESTO UN EJERCICIO HERMENÉUTICO VÁLIDO”.

137. En esta lógica, la persona juzgadora, intérprete de la norma debe evitar en la medida de lo posible ese desenlace e interpretar las normas de tal modo que la contradicción no se produzca y la norma pueda salvarse. Así la persona juzgadora ha de procurar, siempre que sea posible, huir del vacío que se produce cuando se niega validez a una norma y, en el caso concreto, de ser posibles varias interpretaciones, debe preferirse aquella que salve la aparente contradicción.

138. La interpretación de las normas conforme a la Constitución se ha fundamentado tradicionalmente en el principio de conservación de ley, que se asienta a su vez en el principio de seguridad jurídica y en la legitimidad democrática del legislador. Los tribunales, en el marco de sus competencias, sólo pueden declarar la inconstitucionalidad de una ley cuando no resulte posible una interpretación conforme con la Constitución.

139. Por tanto, es claro que ante la interpretación conforme del sistema normativo del depósito legal previsto en la Ley General de Bibliotecas, lo que corresponde es reconocer su constitucionalidad y por ende, negar el amparo solicitado.

- **Reparación oficiosa de la incongruencia de la sentencia revisada**

140. Debido a que el dictado de las sentencias de amparo y su correcta formulación es una cuestión de orden público, ante la incongruencia de los efectos de la interpretación conforme realizada a la norma reclamada, debe prevalecer el sentido general de la parte considerativa, en la que se salvó la alegada contradicción de la norma con la Constitución, a fin de que los derechos, obligaciones o facultades de cualquiera de las partes, se

limiten al verdadero alcance de la sentencia, de ahí que el tribunal revisor debe corregir de oficio la incongruencia de que se trate aunque no exista agravio al respecto.

141. En ese sentido, **corresponde, de oficio, reparar la incongruencia contenida en la sentencia recurrida** pues en ésta se estableció que los artículos 6 y 39 de la Ley General de Bibliotecas son constitucionales al realizar su interpretación conforme, y pese a ello, en un contrasentido, se otorgó la protección constitucional en su contra.

142. Al respecto de la reparación oficiosa de la incongruencia advertida, se tiene que si en una sentencia se concede el amparo a pesar de que la norma reclamada salvó la alegada contradicción con la Constitución, es evidente la incongruencia en la decisión de otorgar el amparo.

143. En ese orden de ideas, en torno a los artículos 6 y 39 de la Ley General de Bibliotecas, en la sentencia recurrida se estableció que son constitucionales al entenderse que el depósito de obras corresponde a las que las personas titulares de sus derechos han decidido su distribución.

144. Es apegada a derecho la decisión adoptada en la sentencia recurrida en torno a que los artículos 6 y 39 de la Ley General de Bibliotecas, son constitucionales.

145. El artículo 39 de la Ley General de Bibliotecas, al disponer que los materiales objeto del depósito legal se entregarán dentro de los 60 días naturales siguientes a la fecha de su edición o producción, con excepción de las publicaciones periódicas que deberán ser entregadas tan pronto sean puestas en circulación, debe

AMPARO EN REVISIÓN 350/2022

relacionarse con los artículos 33 y 37 de la Ley General de Bibliotecas, y 4 de la Ley Federal del Derecho de Autor, para comprender que la característica de las obras que deben enviarse al depósito legal consiste en que sean distribuidas, ya sea para comercialización o de manera gratuita; circunstancia que excluye a los materiales que no hayan sido divulgados o publicados.

146. En ese contexto, el referido artículo 39, al imponer la obligación de entregar las obras editadas o producidas una vez que se hayan divulgado o publicado para cualquiera de sus finalidades, no vulnera los derechos de los autores en sus vertientes patrimonial o moral, en tanto **la temporalidad para efectuar la entrega de los materiales correspondientes deberá computarse a partir de que sean distribuidos**, con la excepción ya señalada respecto de las publicaciones periódicas.

147. Por tanto, ante la constitucionalidad de la norma relativa a la temporalidad para la entrega de las obras sujetas a depósito legal, lo que corresponde es negar la protección constitucional solicitada y no otorgarla bajo una interpretación conforme como se estableció en la sentencia recurrida.

VII. DECISIÓN

148. Conforme a lo expuesto, en la materia competencia originaria de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación, **se revoca** la sentencia recurrida y se **niega el amparo *******, en contra de los artículos 1 fracción VI, 6, 34, 37, 38, 39 y 40 fracción III, de la Ley General de Bibliotecas.

Por lo expuesto y fundado, se resuelve:

PRIMERO. En la materia de la revisión, se **revoca** la sentencia recurrida.

SEGUNDO. La Justicia de la Unión **no ampara ni protege** a *********, en contra de los artículos 1 fracción VI, 6, 34, 37, 38, 39 y 40 fracción III, de la Ley General de Bibliotecas.

Notifíquese; con testimonio de esta sentencia devuélvanse los autos relativos al lugar de su origen y, en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

En términos de lo previsto en los artículos 73, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, 113 y 116 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública; 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; y el Acuerdo General 11/2017, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicado el dieciocho de septiembre de dos mil diecisiete en el Diario Oficial de la Federación, en esta versión pública se suprime la información considerada legalmente como reservada o confidencial que se encuentra en esos supuestos normativos.